



El director de Universidades, Antonio Caballero; el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; y el presidente del Consejo Económico y Social, José Antonio Cobacho. LA VERDAD

## El CES exige que la Ley de Universidades concrete la financiación a las públicas

El consejo respalda la nueva norma, pero echa en falta un «diagnóstico suficientemente detallado del sistema universitario regional» previo

**F. CARRERES**  
Murcia

El Consejo Económico y Social de la Región ha emitido ya su informe favorable a la nueva Ley de Universidades, pero ha planteado una retahíla de reparos y acotaciones al texto que la Consejería de Universidades debe ahora analizar.

El modelo de financiación de las universidades públicas es una de las cuestiones sobre las que el CES plantea reparos: exige más concreción y claridad para que la Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT) tengan garantizado su funcionamiento. «El Consejo considera que la configuración del modelo de financiación presenta un grado de indeterminación que podría dificultar su desarrollo efectivo, especialmente en lo relativo a la delimitación de la financiación estructural del sistema universitario y a la concreción del propio plan plurianual», advierte el informe, que «estima necesario que el modelo de financiación garantice una cobertura adecuada de las necesidades estructurales del sistema, más allá de los costes de personal, incorporando de forma expresa otros elementos esenciales para el funciona-

miento de las universidades, tales como los gastos corrientes, las inversiones, la actividad investigadora estructural y las políticas de innovación y transferencia».

La nueva norma debería ir acompañada, reclama el CES, de un diagnóstico detallado del sistema universitario regional: número de estudiantes, titulaciones, inserción laboral... que no se ha realizado. «La elaboración de un análisis previo más completo, basado en indicadores relevantes sobre la situación del sistema universitario en aspectos como la oferta académica, la evolución del estudiantado, la actividad investigadora, la inserción laboral o la financiación, habría contribuido a fundamentar de manera más precisa las opciones adoptadas por el anteproyecto. Dado el estado actual de tramitación de la norma, se estima conveniente que estos elementos de análisis sean tenidos en cuenta en el desarrollo posterior de la ley, en particular en la planificación estratégica del sistema y en los instrumentos de evaluación y seguimiento que se establezcan», reclama.

El sistema de becas en las universidades privadas también plantea dudas para el Consejo Económico y Social «en lo relativo a la posible concesión de ayudas públicas al estudiantado matriculado en estas instituciones y en la imposición de obligaciones de financiación a las propias universidades, atendiendo a su distinta naturaleza jurídica y régimen de financiación. La vinculación de la financiación de las ayudas a un porcentaje mínimo de

los ingresos derivados de las tasas de matriculación podría generar resultados desiguales entre universidades y no necesariamente alineados con las necesidades reales del estudiantado». La futura ley establece la obligación de las universidades y centros adscritos a destinar, como mínimo, un 3% de las tasas de matriculación al programa de becas, sin embargo, el órgano consultivo observa que «la configuración del sistema plantea diversas dudas interpretativas en cuanto a su alcance y aplicación práctica», principalmente en lo que respecta a las universidades privadas.

A pesar de los reparos, el CES ha avalado el Anteproyecto de Ley de Universidades como «una herramienta necesaria para afrontar los nuevos retos de la educación superior». Para la Consejería de Universidades, ese respaldo se suma «a un amplio proceso previo de participación y diálogo con el conjunto del ecosistema universitario y social, que ha permitido construir un texto compartido y enriquecido con aportaciones de universidades, agentes económicos y sociales, organizaciones representativas y ciudadanía».

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó, tras conocer el contenido del dictamen del CES, que «es especialmente relevante porque respalda la norma de manera unánime y avala no solo la oportunidad de la ley, sino también su enfoque y su ambición para ordenar y fortalecer el sistema universitario de la Región».

## Inspección investiga si una docente dio clases 10 años sin la titulación necesaria

**F. CARRERES**  
Murcia

La Inspección Educativa de la Consejería de Educación está investigando si una profesora de Inglés de un colegio concertado de una pedanía murciana ha estado impartiendo clases durante más de una década sin tener la titulación requerida. La docente ha ejercido además funciones en la dirección del colegio.

La Consejería de Educación confirmó este viernes que la Inspección Educativa ha recibido una denuncia sobre la cuestión, que está investigando. Según fuentes conocedoras del caso, la docente llevaba más de una década impartiendo clases de Inglés en el colegio concertado. Cuando la profesora comenzó a dar clases, el colegio era privado. Fue entonces cuando la Consejería de Educación llevó a cabo los trámites de verificación de la aptitud de la docente para impartir clases. En 2018, el colegio se convirtió en una cooperativa, en la que se integró la profesora.

En el mismo colegio, otro profesor tuvo acceso a su expediente, y encontró elementos que le hicieron sospechar de sus títulos, que remitió a las universidades que los habían expedido para comprobar su autenticidad. Al parece, la Universidad de Murcia respondió a la solicitud de información negando la autenticidad del título que se le remitió. La profesora fue entonces

cuestionada en el colegio y desde entonces se encuentra de baja. Según fuentes cercanas al centro, será expulsada de la cooperativa. La docente sí dispone de titulación universitaria pero, según la investigación de la Inspección Educativa, no de la requerida para impartir las clases.

Aunque se trate de un colegio privado o concertado, la Consejería de Educación es la responsable de comprobar que los docentes cumplen los requisitos para impartir las clases. Los colegios deben enviar a la Consejería de Educación sus propuestas de nombramiento junto con la copia compulsada del título universitario y el título de formación pedagógica (el antiguo CAP o el actual Máster de Profesorado).

### Verificación

La administración verifica además que la titulación del profesor sea concordante con la asignatura que va a impartir, según lo establecido en el Real Decreto 860/2010. Por ejemplo, para dar Matemáticas no basta con ser ingeniero; hay que cumplir unos créditos específicos o tener la titulación exacta requerida. El Servicio de Inspección de la Consejería de Educación es el órgano que verifica el documento de organización del centro cada curso. En el figuran todos los profesores y las asignaturas que dan. La Inspección cruza estos datos con las titulaciones registradas.

## Nuevos decanos de Matemáticas y Comunicación en la UMU

**F. C.**  
Murcia

Varias facultades de la Universidad de Murcia (UMU) están inmersas o han celebrado ya elecciones para renovar a sus decanos. Con la reforma universitaria, los decanos debe ser elegidos mediante sufragio universal directo y ponderado, es decir, todos los miembros de la comunidad de la facultad (estudiantes, profesores y personal técnico) tienen derecho a votar. Los electores votan directamente al candidato (no a través de representantes, como antes), y los votos se dividen por sectores como en los comicios a rector.

La Facultad de Matemáticas ha elegido esta semana al catedrático de Análisis Matemático Francisco Esquembre nuevo decano. Con él tomarán posesión como secretario Il-

defonso Castro; José Fernández, como vicerrector de Estudiantes y Movilidad; José Joaquín Bernal, como vicerrector de Calidad; Carolina Martínez, de Estudios de Grado; y Sergio Estrada, de Estudios de Posgrado



Juan Miguel Aguado



Francisco Esquembre

Además, el catedrático de Periodismo Juan Miguel Aguado fue elegido hace unas semanas decano de la Facultad de Comunicación. Sustituye a Pedro Hellín, quien será vicerrector con el nuevo equipo de Samuel Baixauli. A Aguado le acompañan María Segunda, secretaria de facultad; Javier García, vicedecano de Ordenación Académica; Rocío Zamora, vicedecana de Movilidad e Internacionalización; Lourdes Castelló, vicedecana de Calidad; María del Mar Grandío, de Investigación y Transferencia; Marta Pérez, vicedecana de Innovación Docente y Planes de Estudio; y Paloma del Henar, vicedecana de Relaciones Institucionales.